

DICTAMEN N° 192

Expte N° 00153-F34-96.-

Consejo de Protección de la/
Producción Agrícola. Solici-
ta Instrucciones.-

SEÑORA MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS:

Vienen a dictamen las pre-
sentes actuaciones, en las que la Sra. Ministro de Hacienda
y Finanzas (a instancia de la Sra. Liquidadora del Consejo
de Protección de la Producción Agrícola e/l.) solicita opi-
nión jurídica de Asesoría Letrada de Gobierno respecto del
plazo de prescripción -liberatoria- de los créditos a favor
del aludido organismo, en concepto de primas y retenciones.

Como advertencia previa,
conviene recordar que Asesoría Letrada de Gobierno se ha ex-
pedido sobre el punto en Dictamen N° 425 de 15/11/94
(suscripto por los Dres. Carlos Saffe -entonces Asesor Le-
trado de Gobierno- y Alejandro Ramella -en dicha época, Ase-
sor Letrado Adjunto-).

Adelantamos nuestra coinci-
dencia con la opinión sustentada en el aludido dictamen, que
concluye en que el plazo prescriptivo aplicable es el quin-
quenal (cfr. art. 4027 inc. 3º del Código Civil).

A los efectos de una mejor
comprensión de nuestra opinión, hemos juzgado conveniente
realizar las siguientes consideraciones:

a) El núcleo de la cuestión a dilucidar radica en determinar
qué plazo prescriptivo corresponde aplicar al cobro de las
primas adeudadas (cfr. lo establecido por la Ley Provincial
N° 1.024 -t.o.-)

b) La alternativa sería:

1.- Aplicar el plazo de prescripción decenal: y

2.- aplicar el quinquenal.

c) El plazo de diez años surge de lo establecido por el Có-
digo Tributario Provincial (art. 46º Ley N° 3.908).

d) El de cinco años está consagrado en el art. 4.027 inc. 3º
del Código Civil.

e) De ello se infiere que es imprescindible esclarecer si la
prima que debían pagar los productores (y deducir -y luego
depositar- los agentes de retención), constituye obligación
tributaria en los términos de la Ley N° 3.908.

f) El texto de la Ley N° 1.024 no contribuye a clarificar el
panorama, toda vez que utiliza indistintamente las palabras
'prima' y 'tasa'.

g) Pero, obviamente, no se trata de términos equivalentes.
La importancia de desentrañar la naturaleza jurídica del

monto a abonar por productores y agentes de retención, estriba en que tal circunstancia es imprescindible para dirimir el plazo de prescripción aplicable a la acción para requerir su cobro compulsivo.

En principio, dejamos sentado que la prima no es una tasa (y, tampoco, una obligación tributaria genérica); ello, porque no se le aplican los caracteres de las tasas, v.gr.: 1. La tasa implica siempre una contraprestación de la persona que ha recibido un servicio o prestación particular del Estado; 2. dicho servicio no es de naturaleza comercial ni industrial; etc. (FERNANDEZ VAZQUEZ, Emilio, Diccionario de Derecho Público, Astrea, Buenos Aires, Rep. Arg., 1981, pág. 743). En efecto, en el caso particular, las primas responden al pago por períodos -como obligación a cargo del asegurado- de una suerte de vínculo contractual con el asegurador, quien se compromete a resarcirlo ante el acaecimiento efectivo de un hecho que, al momento de la contratación, aparece como futuro e incierto; es decir, no ha mediado previa recepción del servicio que se contrapreste a través de la prima; además que, el hipotético "servicio", sería -en este caso- de naturaleza industrial.

h) Dilucidada la naturaleza jurídica de la prima o cotización abonada en el contexto del seguro agrícola -no configurando obligación fiscal o tributaria-, juzgamos que el plazo de prescripción aplicable al ejercicio de la acción para la percepción compulsiva de las primas atrasadas -respecto del asegurado-, es de cinco años (cfr. art. 4027 inc. 3º del Código civil), dado que tal es el plazo aplicable a la prescripción liberatoria de "todo lo que deba pagarse por años, o plazos periódicos más cortos" (recordando que las primas debían pagarse con cada cosecha -anualidades-).

i) Igual solución debe aplicarse al supuesto en que el sujeto pasivo sea el agente de retención, pues no podría -válidamente- dispensarse una solución distinta, en tanto la naturaleza de la obligación es idéntica y el hecho de que se trate de sujetos diversos (asegurado y agente de retención), no habilita a mudar el carácter del vínculo obligatorio ni a aplicárseles parámetros temporales de prescripción liberatoria diversos, atento a que las obligaciones dimanarían de la misma fuente.

En el convencimiento de haber dado adecuada respuesta a la requisitoria formulada (concluyendo en que el plazo prescriptivo aplicable es el quinquenal), nos servimos aclarar -frente a lo expresado por la Liquidadora del C.F.P.A. e./l., a fs. 2- que la opinión sustentada por el Dr. Alejandro Ramella (actuando por Fiscalía de Estado y obrante en copia a fs. 9/11) data del año 1991 y el dictamen de Asesoría Letrada de Gobierno -que ratificamos por el presente- Nº 425 (y también suscripto por el Dr. Ramella), es del año 1994, es decir, posterior a aquella postura judicial.

nota de estilo.-

Sirva la presente de atenta

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO,

05 NOV 1996


DR. VICTOR HUGO PENIZZOTTO

